



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN SEGUNDA  
SUBSECCIÓN "B"

Magistrado sustanciador: Luis Gilberto Ortigón Ortigón

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinte (2020)

**Acción : HÁBEAS CORPUS**  
**Actor : ADOLFO GIOVANNY CASTRILLÓN MURILLO**  
**Demandados : UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA – URI DE PUENTE ARANDA – JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE SALAMINA – CALDAS – JUZGADO TERCERO (3) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO – JUZGADO VEINTIUNO (21) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**Expediente : 11001-33-43-064-2020-0007501**

Se ocupa este despacho de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la providencia del 20 de marzo de 2020, que resolvió declarar improcedente la acción de hábeas corpus adelantada por el señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo identificado con cédula de ciudadanía 15.961.705 de Salamina – Caldas, por medio de apoderada judicial.

## **I. ANTECEDENTES**

La parte accionante narró como soporte de la presente acción de hábeas corpus lo siguiente:

Le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad el 10 de mayo de 2014.

El 22 de abril de 2015, el Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, emitió sentencia por el delito de tentativa de extorsión y lo condenó a una pena de 72 meses de prisión, por lo cual, permaneció privado de la libertad, en centro intramural.

En auto del 3 de agosto de 2017 la Sala Penal del Tribunal de Meta le reconoció como redención 11 meses y 3 días por buen comportamiento.

El 18 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio, concedió la sustitución de la medida de aseguramiento privativa

de la libertad a una no privativa, es decir, que en ningún momento quedo en libertad, debido a que una persona con una detención no privativa de la libertad no está en libertad absoluta.

En auto del 17 de marzo de 2020, el Juzgado 3 de Ejecución de Penas de Villavicencio, le reconoció que hasta el 17 de agosto de 2017 cumplió una pena de 39 meses y 8 días. Con lo anterior arrojaría un total de pena purgada de 50 meses y 11 días.

A ello se le debe sumar el tiempo que se purgo pena con una medida no privativa de la libertad, es decir, desde el 17 de agosto de 2017 hasta el 11 de abril de 2019, arrojando un total de 19 meses y 23 días, para un cómputo total de 70 meses y 4 días. A lo anterior se le debe sumar la detención del 13 de marzo de 2020 a la fecha, para un total de 70 meses y 14 días. Tiempo que ha superado los 60 meses sin justificación alguna.

## II PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia del 20 de marzo de 2020 el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la presente acción de hábeas corpus al considerar que el juez que vigila la ejecución de la pena impuesta al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo ya se pronunció sobre la solicitud de libertad inmediata negando la misma y que contra dicha providencia procedían los recursos de reposición y apelación, sin que fueran agotados por el accionante, recursos que no pueden ser remplazados con esta acción.

## III IMPUGNACIÓN

La anterior decisión fue impugnada por la parte accionante alegando que « {...} desde el 18 de agosto de 2017 hasta el momento en que el Tribunal Superior del Meta Sala Penal, resuelve el recurso de alzada, (11 de abril de 2019), se subsana el proceder irregular del Juez de garantías, que revivió la medida de aseguramiento cuando está ya había perdido vigencia, y por ende, el tiempo desde que fue concedida la medida de aseguramiento no privativa de la libertad (18 de agosto de 2017) hasta el 11 de abril de 2019 (momento en que se emitió sentencia de segunda instancia), para lo cual arroja un total de 19 meses y 23 días, deben ser tenidos en cuenta a favor del procesado **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, por cuanto este así como se dijo anteriormente tenía un brazalete electrónico y comparecía a la autoridad judicial a presentarse periódicamente, sin ostentar una libertad absoluta, sino controlada y autorizada por el Juez de Garantías.»

*Aseveró que «No es viable que no se le pueda tener en cuenta el tiempo que purgó, fuera de un establecimiento carcelario, debido a que no es culpa del reo por las disposiciones contrarias que toman los jueces de la república y aún más, en ningún momento se ve reflejado que el juez competente, es decir el Juzgado 4 penal Municipal de Conocimiento de Villavicencio, haya revocado lo efectuado por el Juzgado de Garantías, sino que hizo caso omiso, y dejó tal determinación vigente, aun mas, la fiscalía conocedora de tal proceder, guardo silencio.»*

Expuso que en auto emitido dentro del proceso penal de fecha agosto 3 de 2017, la magistrada Silvia Carolina Rodríguez Parra, le reconoció 11 meses y 3 días, por redención a buen comportamiento, señalando además el mismo Tribunal que le quedaba para ese entonces la pena por purgar de un total de 49 meses y 21 días, los cuales el juez ejecutor ha omitido reconocer.

#### **IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA**

Mediante auto de fecha 24 de marzo de 2020 el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito de Bogotá, concedió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo contra la providencia del 20 de marzo de 2020, impugnación que por reparto del mismo 24 de marzo de esta anualidad, le correspondió conocer a éste Despacho.

#### **v. CONSIDERACIONES**

**Competencia.** Conforme al artículo 2 de la Ley 1095 de 2006 “*Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política*”, son competentes para resolver la solicitud de habeas corpus, todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público, de modo que siendo este Despacho una dependencia que integra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con poder jurisdiccional del Estado, le asiste competencia para ocuparse de examinar el presunto quebrantamiento del derecho constitucional fundamental a la libertad del señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo, quien presuntamente debe ser dejado en libertad por pena cumplida.

Por tanto, Compete al suscrito magistrado desatar la impugnación interpuesta contra la providencia del 20 de marzo de 2020, conforme lo dispone el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, pues dicha norma establece que, cuando el superior jerárquico del *a quo* es un juez plural, el recurso lo debe sustanciar y decidir uno de los magistrados integrantes de la respectiva corporación, quien para tales efectos actúa como juez individual.

**La acción.** La regulación del instituto del habeas corpus, parte de la colina del ordenamiento normativo<sup>1</sup>, cuyo alcance trasciende la mera verificación de la legalidad de la privación de la libertad personal, en sentido material, como parecería entenderse de la lectura desprevenida del artículo 30 constitucional, pues la doble connotación de derecho fundamental y acción constitucional que el mismo comporta, es decir, como *derecho fundamental* y como *mecanismo procesal de protección*, a voces del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, en armonía con el *bloque de constitucionalidad* del cual forma parte, dice relación tanto con el derecho de *libertad personal*, tradicionalmente entendido en su perspectiva *material* o física, de disponer la persona de la posibilidad de deambular a voluntad, o abstenerse de hacerlo, como con otros que le son inherentes, vale decir, la *vida* misma, la *dignidad humana* y los *demás* derechos constitucionales que puedan resultar afectados por causa o con ocasión de la actuación arbitraria de las autoridades, que prive a un ser humano sujeto de derechos de la *libertad* o prolongue *ilegalmente* su restricción; así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia sobre control de constitucionalidad previo de la Ley 1095 de 2006:

*“Por lo tanto, el cometido esencial del habeas corpus no se puede entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza. En tal medida, el radio de protección del habeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con éste, y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad personal.*

(...)

*Así tenemos que, como quedó anteriormente precisado, el habeas corpus protege no solo el derecho a la libertad sino también el derecho a la vida y a la integridad personal, **y todos los derechos fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso de poder** propias de las privaciones irregulares de la libertad.*

*En consecuencia, la definición adoptada por el legislador en el artículo primero del proyecto que ahora se examina ha de entenderse como comprensiva tanto de la modalidad de habeas corpus reparador, como en la modalidad de **habeas corpus correctivo, entendido este último como mecanismo para evitar o poner fin a situaciones que comporten amenazas graves contra los derechos fundamentales de la persona, como la vida o la integridad personal o el derecho a no ser desaparecido.***

---

<sup>1</sup> Artículo 30 de la Constitución Política: “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

(...)

*En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.*

*En suma, **las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el habeas corpus***<sup>2</sup> (se destaca).

De igual manera en criterio de la Corte Constitucional, la persona está privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, cuando es recluida por la autoridad en un lugar diferente o sitio destinado de manera oficial para su detención, o cuando lo hacen sin el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta. Otra hipótesis según el alto Tribunal Constitucional ocurre cuando la propia autoridad al disponer sobre la privación de la libertad de una persona actúa sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

La prolongación ilegal de la privación de la libertad se presenta cuando se detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; o cuando la autoridad pública mantiene privada de la libertad a una persona después que se ha ordenado legalmente por autoridad judicial que se conceda la libertad. Además, puede ocurrir que las detenciones legales se tornen ilegales, como cuando la propia autoridad prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional<sup>3</sup>

El Alto Tribunal de la Jurisdicción Penal reiteró que:

***“Dirigida la acción, entonces, a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o su indebida prolongación, está claro que al funcionario judicial, el examen de la especialísima acción, le está vedado incursionar en terrenos ajenos a este específico tema, so pena de***

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006.

<sup>3</sup> C.Const. Sent. C-187/06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

**invadir orbitas de competencia ajenas y desbordar la naturaleza de su función defensora de derechos fundamentales...**

*En el presente evento, la privación de la libertad que padece actualmente MARÍA FRANCY MADRIGAL TRIVIÑO, está sustentada, como se acaba de consignar en los antecedentes del caso, en la condena a pena de prisión que le fue impuesta por autoridad competente tras ser declarada, en sentencia hoy ejecutoriada, autora penalmente responsable de los delitos de hurto agravado, falsedad en documento privado y destrucción, supresión, y ocultamiento de documento privado, concediéndosele el beneficio de suspensión condicional de la pena, condena de cuya vigilancia, se ocupa el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que, luego de recibir varias quejas del representante legal de la empresa afectada con las conductas punibles acerca del incumplimiento de la sentenciada en relación con el pago de los perjuicios, resolvió revocarle el sustituto penal que se le había otorgado...*

*En efecto, la petición se fundamenta en la carencia de recursos para cumplir con el pago de la indemnización de los perjuicios materiales tasados en la sentencia de condena, y la pretensión se extiende a que se conceda quemante la libertad por considerar que ya había pasado el periodo de prueba cuando la condenada dejó de hacer los depósitos correspondientes a cada mes, aspectos que no pueden ser discutidas a través de esta acción constitucional de amparo de la libertad personal.”<sup>4</sup> (Subraya y negrilla por fuera del texto)*

**Pruebas que reposan en el plenario**

- Sentencia del 22 de abril de 2014 emitida por el Juzgado Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Conocimiento en la que se condenó al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo a la pena privativa de la libertad de 72 meses de prisión y multa de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de extorsión en modalidad tentativa.
- Acta de compromiso suscrita el 18 de agosto de 2017 por el señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo identificado con cédula de ciudadanía 15.961.705 de Salamina – Caldas, ante el Juzgado Primero (1) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio – Meta, en la que el procesado se comprometió a presentarse personalmente cada vez que fuera requerido debido a la sustitución de su pena, por la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
- Sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Penal magistrado ponente Alcibiades Vargas Bautista, que modificó

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. 3 de febrero de 2011, procesos No. 35759 MP. Sigifredo Espinosa Pérez

la sentencia del 22 de abril de 2014, en el sentido de imponer al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo pena privativa de 60 meses de prisión y multa de 262.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- Boleta de encarcelación N° 026 del 18 de marzo de 2020 emitida por el Juzgado Veintiuno (21) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., a órdenes del Juzgado Tercero (3) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta, contra el señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo identificado con cédula de ciudadanía 15.961.705 de Salamina – Caldas, por el delito de extorsión en grado de tentativa.
- Contestación de la presente acción de hábeas corpus por parte del Juzgado Tercero (3) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta, despacho encargado de vigilar la pena impuesta al aquí accionante, en la que manifestó que el sentenciado ha estado privado de la libertad en dos oportunidades la primera desde el 9 de mayo de 2014 al 17 de agosto de 2017 para un total de 39 meses y 8 días y la segunda desde el 13 de marzo a la fecha (7 días) para un total de 39 meses y 15 días, sin obtener redención de pena.

Igualmente señaló el juzgado de la ejecución de la pena, que el 17 de marzo de 2020 se negó la solicitud de extinción de la pena y libertad por pena cumplida, decisión frente a la cual no se ha presentado ningún recurso.

- Contestación a esta acción por parte del Juzgado Tercero (3) Promiscuo Municipal de Salamina – Caldas, en la que invocó su falta de legitimación en la causa, bajo el argumento de que su actuación se limitó a una comisión relativa a las presentaciones personales del procesado en atención a la sustitución de medida de aseguramiento no privativa de la libertad según decisión del 11 de agosto de 2017 emitida por el Juzgado Primero (1) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio – Meta. En dicha contestación se relacionaron 21 presentaciones del accionante. Donde además se afirmó que la consecuencia lógica de la condena del 25 de abril de 2019 era el decaimiento de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad lo que incluía las presentaciones periódicas a dicho juzgado comisionado.
- Contestación a la presente acción por la URI de Puente Aranda, en la que informaron que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental al capturado, que su detención obedece a la boleta de encarcelación emitida por la autoridad competente en la que se dispuso

mantener privado de la libertad al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo.

### **Caso concreto.**

En relación con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1095 de 2006, el despacho considera que no es necesario practicar visita al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo, en atención a que del material probatorio arrojado al expediente no se evidencia un peligro que afecte la integridad física del detenido, además que el accionante se encuentra privado de la libertad en jurisdicción diferente a la de esta Corporación y debido a la premura de la acción no es factible practicar una visita, ni comisionar la misma.

En el presente asunto la apoderada del señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo, solicita la libertad inmediata de su poderdante por cumplimiento de la pena. Señala que para el 13 de marzo de 2020 fecha en que fue capturado nuevamente su defendido, este ya había cumplido la totalidad de la pena impuesta por el Tribunal Superior de Villavicencio.

Del estudio integral del expediente se observa que: i) el Juzgado Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Conocimiento en sentencia del 22 de abril de 2014 condenó al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo a la pena privativa de la libertad de 72 meses de prisión, por el delito de extorsión en modalidad tentativa; ii) el Juzgado Primero (1) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio – Meta, en decisión del 11 de agosto de 2017 sustituyó la pena de prisión por la medida de aseguramiento no privativa de la libertad; iii) el 18 de agosto de 2017 el señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo suscribió un acta en el que se comprometió a presentarse personalmente cada vez que fuera requerido debido a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad otorgada por el juez de garantías; iv) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Penal en sentencia del 28 de marzo de 2019 modificó la sentencia del 22 de abril de 2014, en el sentido de imponer al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo pena privativa definitiva de 60 meses de prisión.

Las razones de inconformidad de la parte recurrente obedecen a que, en su sentir, para la fecha en que se produjo su nueva captura esto es, el 13 de marzo de 2020, ya se había cumplido la totalidad de la pena impuesta por el Tribunal Superior de Villavicencio de 60 meses de prisión.



En las alegaciones del recurso de apelación objeto de esta providencia la parte accionante hizo hincapié en la presunta vulneración al debido proceso y el error judicial cometido por las autoridades, toda vez que el tiempo en que se mantuvo vigente la medida de aseguramiento no privativa de la libertad debe ser contabilizado con la condena impuesta, ya que durante ese interregno no contó con una libertad absoluta, sino que debía estarse presentando con frecuencia ante el Juzgado Tercero (3) Promiscuo Municipal de Salamina – Caldas.

Así las cosas, se entiende que lo perseguido por el accionante es que se ordene su libertad inmediata por pena cumplida. No obstante, para este despacho no es procedente estudiar la acción de hábeas corpus fundado en las alegaciones del escrito inicial de la acción, ni del recurso de apelación, en razón a que los fundamentos del señor Castrillón Murillo obedecen a un debate propio del proceso penal, en el cual el juez natural debe analizar la condena y atender tanto las redenciones de pena como el conteo de los términos durante la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Si bien es cierto que, la institución del hábeas corpus tiene como propósito proteger a la persona de una privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, también lo es que, al juez constitucional le está vedado incursionar en terrenos extraños, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural, al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.

Por tanto, las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial, cuando es en éste en que se ha dispuesto la privación de la libertad, sin que con dicho propósito resulte viable, en principio, acudir a la invocación del hábeas corpus, pues el ordenamiento confiere diversos mecanismos, tales como la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la interposición de los recursos procedentes contra las decisiones negativas de libertad.

Justo en este último presupuesto es donde más se avizora la improcedencia de esta acción, ya que, frente a la negativa de libertad inmediata deprecada por el accionante, el Juzgado Tercero (3) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta, se pronunció el pasado 17 de marzo de esta anualidad de manera desfavorable, sin que el interesado interpusiera los recursos de ley, según lo expuso el precitado juzgado en su

escrito de contestación. Por tanto, se tiene que la parte no agotó todas las instancias procesales del proceso penal para solicitar su derecho a la libertad por pena cumplida.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que las alegaciones referentes a la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso o las irregularidades cometidas por las autoridades judiciales en sus providencias, de la forma en que fue expuesta en el recurso de apelación no son susceptibles de estudiarse en la acción de hábeas corpus, pero sí podrían analizarse en la acción de tutela, obviamente una vez se hayan agotado todas las instancias del proceso penal y no existan mecanismos subsidiarios.

De conformidad con todo lo expuesto, el despacho encuentra que no es procedente el amparo constitucional invocado por el señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo, puesto que la privación de su libertad se encuentra legalmente amparada en la sentencia del 22 de abril de 2014 emitida por el Juzgado Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Conocimiento y la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Penal. Igualmente, se encuentra respaldada en la Boleta de encarcelación N° 026 del 18 de marzo de 2020 emitida por el Juzgado Veintiuno (21) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.

En ese orden de ideas, se confirmará la providencia del 20 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la cual se declaró improcedente el amparo constitucional de hábeas corpus.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección “B”,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Confirmar la sentencia del 20 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, que declaró improcedente la petición de hábeas corpus instaurada por el ciudadano Adolfo Giovanni Castrillón Murillo identificado con cédula de ciudadanía 15.961.705 de Salamina – Caldas, quien actuó a través de apoderada judicial.

**SEGUNDO:** Comuníquese esta decisión por el medio más expedito al señor Adolfo Giovanni Castrillón Murillo o su apoderada, a la Unidad de Reacción Inmediata – URI de

Puente Aranda, al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Salamina – Caldas, al Juzgado Tercero (3) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, al Juzgado Veintiuno (21) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito de Bogotá.

Comuníquese y cúmplase,



LUIS GILBERTO ORTEGÓN ORTEGÓN  
Magistrado